

Códigos electrónicos

Constitución Española

The Spanish Constitution

Edición actualizada a 20 de mayo de 2026

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO



La última versión de este Código en PDF y ePUB está disponible para su descarga **gratuita** en:
www.boe.es/biblioteca_juridica/

Alertas de actualización en Mi BOE: www.boe.es/mi_boe/

Para adquirir el Código en formato papel: tienda.boe.es



Esta obra está sujeta a licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional, (CC BY-NC-ND 4.0).

© Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

NIPO (PDF): 007-16-051-4

NIPO (Papel): 007-16-052-X

NIPO (ePUB): 007-16-050-9

ISBN: 978-84-340-2283-6

Depósito Legal: M-7190-2016

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado
cpage.mpr.gob.es

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avenida de Manoteras, 54
28050 MADRID
www.boe.es



SUMARIO

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

§ 1. Constitución Española	1
----------------------------------	---

THE SPANISH CONSTITUTION

§ 2. The Spanish Constitution	38
-------------------------------------	----

ÍNDICE SISTEMÁTICO

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

§ 1. Constitución Española.	1
<i>Preámbulo.</i>	1
TÍTULO PRELIMINAR	1
TÍTULO I. De los derechos y deberes fundamentales.	3
CAPÍTULO PRIMERO. De los españoles y los extranjeros.	3
CAPÍTULO SEGUNDO. Derechos y libertades	3
Sección 1. ^a De los derechos fundamentales y de las libertades públicas	3
Sección 2. ^a De los derechos y deberes de los ciudadanos	7
CAPÍTULO TERCERO. De los principios rectores de la política social y económica	8
CAPÍTULO CUARTO. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales	10
CAPÍTULO QUINTO. De la suspensión de los derechos y libertades	10
TÍTULO II. De la Corona	11
TÍTULO III. De las Cortes Generales	13
CAPÍTULO PRIMERO. De las Cámaras	13
CAPÍTULO SEGUNDO. De la elaboración de las leyes	16
CAPÍTULO TERCERO. De los Tratados Internacionales	18
TÍTULO IV. Del Gobierno y de la Administración	18
TÍTULO V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales	20
TÍTULO VI. Del Poder Judicial	22
TÍTULO VII. Economía y Hacienda	24
TÍTULO VIII. De la Organización Territorial del Estado	26
CAPÍTULO PRIMERO. Principios generales.	26
CAPÍTULO SEGUNDO. De la Administración Local	27
CAPÍTULO TERCERO. De las Comunidades Autónomas	27
TÍTULO IX. Del Tribunal Constitucional.	33
TÍTULO X. De la reforma constitucional	34
<i>Disposiciones adicionales</i>	35
<i>Disposiciones transitorias</i>	35
<i>Disposiciones derogatorias</i>	37
<i>Disposiciones finales</i>	37

THE SPANISH CONSTITUTION

§ 2. The Spanish Constitution.	38
PREAMBLE	38
PRELIMINARY PART.	38
PART I. Fundamental rights and duties.	40
CHAPTER ONE. Spaniards and Aliens	40
CHAPTER TWO. Rights and Liberties.	40
Section 1. Fundamental Rights and Public Liberties	41
Section 2. Rights and Duties of Citizens	44
CHAPTER THREE. Governing Principles of Economic and Social Policy.	45
CHAPTER FOUR. Guarantee of Fundamental Rights and Liberties	47
CHAPTER FIVE. Suspension of Rights and Liberties	47
PART II. The Crown	48
PART III. The Cortes Generales	50
CHAPTER ONE. The Houses of Parliament	50

ÍNDICE SISTEMÁTICO

CHAPTER TWO. Drafting of Laws	53
CHAPTER THREE. International Treaties	55
PART IV. Government and Administration	55
PART V. Relations between the Government and the Cortes Generales	57
PART VI. Judicial Power	59
PART VII. Economy and Finance.	61
PART VIII. Territorial Organisation of the State	63
CHAPTER ONE. General Principles	63
CHAPTER TWO. Local Government.	64
CHAPTER THREE. Autonomous Communities	64
PART IX. Constitutional Court.	70
PART X. Constitutional amendment	71
ADDITIONAL PROVISIONS.	72
INTERIM PROVISIONS	72
REPEALS	74
FINAL PROVISION	74

§ 1

Constitución Española

Cortes Generales
«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978
Última modificación: 20 de mayo de 2026
Referencia: BOE-A-1978-31229

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN,

SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:

PREÁMBULO

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

§ 1 Constitución Española

Artículo 2.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3.

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4.

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Artículo 5.

La capital del Estado es la villa de Madrid.

Artículo 6.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 7.

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 8.

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

Artículo 9.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

TÍTULO I

De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10.

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

CAPÍTULO PRIMERO

De los españoles y los extranjeros

Artículo 11.

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Artículo 12.

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Artículo 13.

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

CAPÍTULO SEGUNDO

Derechos y libertades

Artículo 14.

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 15.

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida

§ 1 Constitución Española

la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 16.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 18.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 19.

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

§ 1 Constitución Española

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Artículo 21.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 22.

1. Se reconoce el derecho de asociación.

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 23.

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 24.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 25.

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales

§ 1 Constitución Española

de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 26.

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Artículo 27.

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

Artículo 28.

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 29.

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

Sección 2.^a De los derechos y deberes de los ciudadanos**Artículo 30.**

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31.

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 32.

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Artículo 33.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34.

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

Artículo 35.

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36.

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Artículo 37.

1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

§ 1 Constitución Española

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 38.

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

CAPÍTULO TERCERO

De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 39.

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Artículo 40.

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41.

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 42.

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

Artículo 43.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

§ 1 Constitución Española

Artículo 44.

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Artículo 45.

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46.

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Artículo 47.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 48.

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49.

1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.

2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

Artículo 50.

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 51.

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

§ 1 Constitución Española

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52.

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

CAPÍTULO CUARTO

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Artículo 53.

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Artículo 54.

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

CAPÍTULO QUINTO

De la suspensión de los derechos y libertades

Artículo 55.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

§ 1 Constitución Española

TÍTULO II

De la Corona**Artículo 56.**

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

Artículo 57.

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.

3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

5. Las abdicaciones y renunciaciones y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

Artículo 58.

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Artículo 59.

1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.

2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.

3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.

5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Artículo 60.

1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo

§ 1 Constitución Española

nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

Artículo 61.

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.

Artículo 62.

Corresponde al Rey:

- a) Sancionar y promulgar las leyes.
- b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
- c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
- d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
- e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
- f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
- g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
- h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
- i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
- j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artículo 63.

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.

3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Artículo 64.

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.

2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65.

1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.

2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

TÍTULO III

De las Cortes Generales

CAPÍTULO PRIMERO

De las Cámaras**Artículo 66.**

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

3. Las Cortes Generales son inviolables.

Artículo 67.

1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.

2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

Artículo 68.

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

Artículo 69.

1. El Senado es la Cámara de representación territorial.

2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.

3. En las provincias insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.

5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de

§ 1 Constitución Española

acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.

6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

Artículo 70.

1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso:

- a) A los componentes del Tribunal Constitucional.
- b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.
- c) Al Defensor del Pueblo.
- d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
- e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.
- f) A los miembros de las Juntas Electorales.

2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

Artículo 71.

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculcados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.

Artículo 72.

1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.

2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.

3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

Artículo 73.

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.

Artículo 74.

1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.

§ 1 Constitución Española

2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94, 1, 145, 2 y 158, 2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

Artículo 75.

1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.
2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación.
3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 76.

1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.

Artículo 77.

1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.

Artículo 78.

1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintidós miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.
3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.
4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

Artículo 79.

1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.
3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

§ 1 Constitución Española

Artículo 80.

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la elaboración de las leyes

Artículo 81.

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Artículo 82.

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.

2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.

5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

Artículo 83.

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:

- a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
- b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Artículo 84.

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Artículo 85.

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

Artículo 86.

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades

§ 1 Constitución Española

de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Artículo 87.

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Artículo 88.

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Artículo 89.

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.

2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.

Artículo 90.

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.

2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.

3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

Artículo 91.

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Artículo 92.

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

§ 1 Constitución Española

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

CAPÍTULO TERCERO

De los Tratados Internacionales

Artículo 93.

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Artículo 94.

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:

- a) Tratados de carácter político.
- b) Tratados o convenios de carácter militar.
- c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
- d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
- e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

Artículo 95.

1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.

2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Artículo 96.

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

TÍTULO IV

Del Gobierno y de la Administración

Artículo 97.

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

§ 1 Constitución Española

Artículo 98.

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.

2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

Artículo 99.

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Artículo 100.

Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.

Artículo 101.

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Artículo 102.

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Artículo 103.

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

§ 1 Constitución Española

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 104.

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Artículo 105.

La ley regulará:

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Artículo 106.

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Artículo 107.

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.

TÍTULO V

De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

Artículo 108.

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

Artículo 109.

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 110.

1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

§ 1 Constitución Española

Artículo 111.

1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.

2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Artículo 112.

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Artículo 113.

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Artículo 114.

1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.

2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.

Artículo 115.

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.

2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.

3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.

Artículo 116.

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

§ 1 Constitución Española

4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

TÍTULO VI

Del Poder Judicial

Artículo 117.

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

Artículo 118.

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Artículo 119.

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artículo 120.

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

§ 1 Constitución Española

Artículo 121.

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

Artículo 122.

1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Artículo 123.

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

Artículo 124.

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 125.

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Artículo 126.

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

Artículo 127.

1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La

§ 1 Constitución Española

ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

TÍTULO VII

Economía y Hacienda

Artículo 128.

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Artículo 129.

1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Artículo 130.

1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.

Artículo 131.

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

Artículo 132.

1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

Artículo 133.

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.

§ 1 Constitución Española

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.
4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Artículo 134.

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.
2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.
5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.
6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.
7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Artículo 135.

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

- a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

§ 1 Constitución Española

- b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
- c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Artículo 136.

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

TÍTULO VIII

De la Organización Territorial del Estado

CAPÍTULO PRIMERO

Principios generales

Artículo 137.

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138.

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139.

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

§ 1 Constitución Española

CAPÍTULO SEGUNDO

De la Administración Local

Artículo 140.

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Artículo 141.

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142.

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO TERCERO

De las Comunidades Autónomas

Artículo 143.

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Artículo 144.

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

§ 1 Constitución Española

Artículo 145.

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Artículo 146.

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

Artículo 147.

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:
 - a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
 - b) La delimitación de su territorio.
 - c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
 - d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Artículo 148.

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:
 - 1.^a Organización de sus instituciones de autogobierno.
 - 2.^a Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
 - 3.^a Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
 - 4.^a Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
 - 5.^a Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
 - 6.^a Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
 - 7.^a La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
 - 8.^a Los montes y aprovechamientos forestales.
 - 9.^a La gestión en materia de protección del medio ambiente.
 - 10.^a Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
 - 11.^a La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
 - 12.^a Ferias interiores.
 - 13.^a El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
 - 14.^a La artesanía.
 - 15.^a Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.

§ 1 Constitución Española

- 16.^a Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
- 17.^a El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
- 18.^a Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
- 19.^a Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
- 20.^a Asistencia social.
- 21.^a Sanidad e higiene.
- 22.^a La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

Artículo 149.

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1.^a La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2.^a Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

3.^a Relaciones internacionales.

4.^a Defensa y Fuerzas Armadas.

5.^a Administración de Justicia.

6.^a Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

7.^a Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

8.^a Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

9.^a Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

10.^a Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

11.^a Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.

12.^a Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.

13.^a Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

14.^a Hacienda general y Deuda del Estado.

15.^a Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

16.^a Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.

17.^a Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

18.^a Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

19.^a Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.

§ 1 Constitución Española

20.^a Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

21.^a Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.

22.^a La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

23.^a Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

24.^a Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.

25.^a Bases de régimen minero y energético.

26.^a Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

27.^a Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

28.^a Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

29.^a Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

30.^a Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

31.^a Estadística para fines estatales.

32.^a Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Artículo 150.

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

§ 1 Constitución Española

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Artículo 151.

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.

5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 152.

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los

§ 1 Constitución Española

supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

Artículo 153.

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

Artículo 154.

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Artículo 155.

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Artículo 156.

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Artículo 157.

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.

e) El producto de las operaciones de crédito.

§ 1 Constitución Española

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Artículo 158.

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

TÍTULO IX

Del Tribunal Constitucional

Artículo 159.

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

Artículo 160.

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

Artículo 161.

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

§ 1 Constitución Española

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Artículo 162.

1. Están legitimados:

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Artículo 163.

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Artículo 164.

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165.

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

TÍTULO X

De la reforma constitucional

Artículo 166.

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Artículo 167.

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

§ 1 Constitución Española

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Artículo 168.

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Artículo 169.

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

Disposición adicional primera.

La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

Disposición adicional segunda.

La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado.

Disposición adicional tercera.

La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico.

Disposición adicional cuarta.

En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Disposición transitoria primera.

En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que en el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.

Disposición transitoria segunda.

Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.

§ 1 Constitución Española

Disposición transitoria tercera.

La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del artículo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.

Disposición transitoria cuarta.

1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.

2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.

Disposición transitoria quinta.

Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144.

Disposición transitoria sexta.

Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido.

Disposición transitoria séptima.

Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos:

a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a esta Constitución.

b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143.

c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.

Disposición transitoria octava.

1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981.

2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

Durante este período, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101.

§ 1 Constitución Española

3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69,3.

Disposición transitoria novena.

A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159.

Disposición derogatoria.

1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945.

2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.

3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.

Disposición final.

Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.

§ 2

The Spanish Constitution

Cortes Generales
«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978
Última modificación: 20 de mayo de 2026
Referencia: BOE-A-1978-31229-EN

Don Juan Carlos I, King of Spain, announce to all those who may have knowledge of this,
That the Cortes have passed and the Spanish people have ratified the following
Constitution:

PREAMBLE

The Spanish Nation, desiring to establish justice, liberty and security, and to promote the well-being of all its members, in the exercise of its sovereignty, proclaims its will to:

Guarantee democratic co-existence under the Constitution and the law, in accordance with a fair social and economic order;

Consolidate a State of Law which ensures the rule of law as an expression of the popular will;

Protect all Spaniards and peoples of Spain in the exercise of human rights, of their cultures and traditions, and of their languages and institutions;

Promote the progress of culture and of the economy in order to ensure a worthy quality of life for all;

Establish a democratic and advanced society; and

Collaborate in the strengthening of peaceful relations and effective cooperation amongst all the peoples of the world.

Wherefore, the Cortes pass and the Spanish people ratify the following

CONSTITUTION

PRELIMINARY PART

Article 1.

1. Spain is hereby established as a social and democratic State, subject to the rule of law, which advocates as the highest values of its legal order, liberty, justice, equality and political pluralism.

2. National sovereignty is vested in the Spanish people, from whom emanate the powers of the State.

3. The political form of the Spanish State is that of a parliamentary monarchy.

§ 2 The Spanish Constitution

Article 2.

The Constitution is based on the indissoluble unity of the Spanish nation, the common and indivisible country of all Spaniards; it recognises and guarantees the right to autonomy of the nationalities and regions of which it is composed, and the solidarity amongst them all.

Article 3.

1. Castilian is the official Spanish language of the State. All Spaniards have the duty to know it and the right to use it.

2. The other Spanish languages shall also be official in the respective Autonomous Communities in accordance with their Statutes.

3. The wealth of the different language modalities of Spain is a cultural heritage which shall be the object of special respect and protection.

Article 4.

1. The flag of Spain consists of three horizontal stripes: red, yellow and red, the yellow stripe being double the width of each red stripe.

2. The Statutes may recognise flags and ensigns of the Autonomous Communities. These shall be used together with the flag of Spain on their public buildings and in their official ceremonies.

Article 5.

1. The capital of the State is the city of Madrid.

Article 6.

Political parties are the expression of political pluralism; they contribute to the formation and expression of the will of the people and are a fundamental instrument for political participation. Their creation and the exercise of their activities are free in so far as they respect the Constitution and the law. Their internal structure and operation must be democratic.

Article 7.

Trade unions and employers associations contribute to the defence and promotion of the economic and social interests which they represent. Their creation and the exercise of their activities shall be unrestricted in so far as they respect the Constitution and the law. Their internal structure and operation must be democratic.

Article 8.

1. The mission of the Armed Forces, comprising the Army, the Navy and the Air Force, is to guarantee the sovereignty and independence of Spain and to defend its territorial integrity and the constitutional order.

2. The basic structure of military organisation shall be regulated by an organic law in accordance with the principles of the Constitution.

Article 9.

1. Citizens and public authorities are bound by the Constitution and all other legal provisions.

2. It is incumbent upon the public authorities to promote conditions which ensure that the freedom and equality of individuals and of the groups to which they belong may be real and effective, to remove the obstacles which prevent or hinder their full enjoyment, and to facilitate the participation of all citizens in political, economic, cultural and social life.

3. The Constitution guarantees the principle of legality, the hierarchy of legal provisions, the publicity of legal enactments, the nonretroactivity of punitive measures that are unfavourable to or restrict individual rights, the certainty that the rule of law will prevail, the

§ 2 The Spanish Constitution

accountability of the public authorities, and the prohibition against arbitrary action on the part of the latter.

PART I

Fundamental rights and duties

Article 10.

1. The human dignity, the inviolable and inherent rights, the free development of the personality, the respect for the law and for the rights of others are the foundation of political order and social peace.

2. The principles relating to the fundamental rights and liberties recognised by the Constitution shall be interpreted in conformity with the Universal Declaration of Human Rights and the international treaties and agreements thereon ratified by Spain.

CHAPTER ONE

Spaniards and Aliens

Article 11.

1. Spanish nationality is acquired, retained and lost in accordance with the provisions of the law.

2. No person of Spanish origin may be deprived of his or her nationality.

3. The State may negotiate dual nationality treaties with Latin-American countries or with those which have had or which have special links with Spain. In these countries, Spaniards may become naturalised without losing their nationality of origin, even if said countries do not recognise a reciprocal right to their own citizens.

Article 12.

Spaniards legally come of age at eighteen.

Article 13.

1. Aliens shall enjoy the public freedoms guaranteed by the present Title, under the terms to be laid down by treaties and the law.

2. Only Spaniards shall be entitled to the rights recognised in Article 23, except in cases which may be established by treaty or by law concerning the right to vote and the right to be elected in municipal elections, in accordance with the principle of reciprocity.

3. Extradition shall be granted only in compliance with a treaty or with the law, on the basis of the principle of reciprocity. Extradition shall be excluded for political offences; but acts of terrorism shall not be regarded as such.

4. The law shall establish the terms under which citizens from other countries and stateless persons may enjoy the right to asylum in Spain.

CHAPTER TWO

Rights and Liberties

Article 14.

Spaniards are equal before the law and may not in any way be discriminated against on account of birth, race, sex, religion, opinion or any other personal or social condition or circumstance.

§ 2 The Spanish Constitution

Section 1. Fundamental Rights and Public Liberties

Article 15.

Everyone has the right to life and to physical and moral integrity, and may under no circumstances be subjected to torture or to inhuman or degrading punishment or treatment. The death penalty is hereby abolished, except as provided by military criminal law in times of war.

Article 16.

1. Freedom of ideology, religion and worship of individuals and communities is guaranteed, with no other restriction on their expression than may be necessary to maintain public order as protected by law.

2. No one may be compelled to make statements regarding his religion, beliefs or ideologies.

3. There shall be no State religion. The public authorities shall take the religious beliefs of Spanish society into account and shall consequently maintain appropriate cooperation with the Catholic Church and the other confessions.

Article 17.

1. Every person has a right to freedom and security. No one may be deprived of his or her freedom except in accordance with the provisions of this article and in the cases and in the manner provided by the law.

2. Preventive detention may last no longer than the time strictly required in order to carry out the necessary investigations aimed at establishing the facts; in any case the person arrested must be set free or handed over to the judicial authorities within a maximum period of seventy-two hours.

3. Any person arrested must be informed immediately, and in a manner understandable to him or her, of his or her rights and of the grounds for his or her arrest, and may not be compelled to make a statement. The arrested person shall be guaranteed the assistance of a lawyer during police and judicial proceedings, under the terms established by the law.

4. A habeas corpus procedure shall be regulated by law in order to ensure the immediate handing over to the judicial authorities of any person arrested illegally.

Likewise, the maximum period of provisional imprisonment shall be stipulated by law.

Article 18.

1. The right to honour, to personal and family privacy and to the own image is guaranteed.

2. The home is inviolable. No entry or search may be made without the consent of the occupant or a legal warrant, except in cases of flagrante delicto.

3. Secrecy of communications is guaranteed, particularly of postal, telegraphic and telephonic communications, except in the event of a court order to the contrary.

4. The law shall limit the use of data processing in order to guarantee the honour and personal and family privacy of citizens and the full exercise of their rights.

Article 19.

Spaniards have the right to choose their place of residence freely, and to move about freely within the national territory.

Likewise, they have the right to freely enter and leave Spain subject to the conditions to be laid down by the law. This right may not be restricted for political or ideological reasons.

Article 20.

1. The following rights are recognised and protected:

a) the right to freely express and disseminate thoughts, ideas and opinions through words, in writing or by any other means of communication;

§ 2 The Spanish Constitution

b) the right to literary, artistic, scientific and technical production and creation;
 c) the right to academic freedom;
 d) the right to freely communicate or receive accurate information by any means of dissemination whatsoever. The law shall regulate the right to invoke personal conscience and professional secrecy in the exercise of these freedoms.

2. The exercise of these rights may not be restricted by any form of prior censorship.

3. The law shall regulate the organisation and parliamentary control of the social communications media under the control of the State or any public agency and shall guarantee access to such media to the main social and political groups, respecting the pluralism of society and of the various languages of Spain.

4. These freedoms are limited by respect for the rights recognised in this Title, by the legal provisions implementing it, and especially by the right to honour, to privacy, to personal reputation and to the protection of youth and childhood.

5. The confiscation of publications and recordings and other information media may only be carried out by means of a court order.

Article 21.

1. The right to peaceful unarmed assembly is recognised. The exercise of this right shall not require prior authorisation.

2. In the event of meetings in public places and of demonstrations, prior notification shall be given to the authorities, who may ban them only when there are well founded grounds to expect a breach of public order, involving danger to persons or property.

Article 22.

1. The right of association is recognised.

2. Associations which pursue ends or use means classified as criminal offences are illegal.

3. Associations set up on the basis of this article must be recorded in a register for the sole purpose of public knowledge.

4. Associations may only be dissolved or have their activities suspended by virtue of a justified court order.

5. Secret and paramilitary associations are prohibited.

Article 23.

1. Citizens have the right to participate in public affairs, directly or through representatives freely elected in periodic elections by universal suffrage.

2. They likewise have the right to access on equal terms to public office, in accordance with the requirements determined by law.

Article 24.

1. Every person has the right to obtain the effective protection of the Judges and the Courts in the exercise of his or her legitimate rights and interests, and in no case may he go undefended.

2. Likewise, all persons have the right of access to the ordinary judge predetermined by law; to the defence and assistance of a lawyer; to be informed of the charges brought against them; to a public trial without undue delays and with full guarantees; to the use of evidence appropriate to their defence; to not make selfincriminating statements; to not declare themselves guilty; and to be presumed innocent.

The law shall determine the cases in which, for reasons of family relationship or professional secrecy, it shall not be compulsory to make statements regarding alleged criminal offences.

§ 2 The Spanish Constitution

Article 25.

1. No one may be convicted or sentenced for any act or omission which at the time it was committed did not constitute a felony, misdemeanour or administrative offence according to the law in force at that time.

2. Punishments entailing imprisonment and security measures shall be aimed at rehabilitation and social reintegration and may not consist of forced labour. The person sentenced to prison shall enjoy during the imprisonment the fundamental rights contained in this Chapter except those expressly limited by the terms of the sentence, the purpose of the punishment and the penal law. In any case, he shall be entitled to paid employment and to the appropriate Social Security benefits, as well as to access to cultural opportunities and the overall development of his or her personality.

3. The Civil Administration may not impose penalties which directly or indirectly imply deprivation of freedom.

Article 26.

Courts of Honour are prohibited within the framework of the Civil Administration and of professional associations.

Article 27.

1. Everyone has the right to education. Freedom of teaching is recognised.

2. Education shall aim at the full development of the human character with due respect for the democratic principles of coexistence and for the basic rights and freedoms.

3. The public authorities guarantee the right of parents to ensure that their children receive religious and moral instruction that is in accordance with their own convictions.

4. Basic education is compulsory and free.

5. The public authorities guarantee the right of everyone to education, through general education programming, with the effective participation of all parties concerned and the setting up of educational centres.

6. The right of individuals and legal entities to set up educational centres is recognised, provided they respect Constitutional principles.

7. Teachers, parents and, when appropriate, pupils, shall share in the control and management of all the centres maintained by the Administration out of public funds, under the terms established by the law.

8. The public authorities shall inspect and standardise the educational system in order to guarantee compliance with the law.

9. The public authorities shall give aid to teaching establishments which meet the requirements to be laid down by the law.

10. The autonomy of Universities is recognised, under the terms established by the law.

Article 28.

1. Everyone has the right to freely join a trade union. The law may limit the exercise of this right or make an exception to it in the case of the Armed Forces or Institutes or other bodies subject to military discipline, and shall regulate the special conditions of its exercise by civil servants. Trade union freedom includes the right to set up trade unions and to join the union of one's choice, as well as the right of the trade unions to form confederations and to found international trade union organisations, or to become members thereof. No one may be compelled to join a trade union.

2. The right of workers to strike in defence of their interests is recognised. The law regulating the exercise of this right shall establish the guarantees necessary to ensure the maintenance of essential community services.

Article 29.

1. All Spaniards shall have the right to individual and collective petition, in writing, in the manner and subject to the consequences established by the law.

§ 2 The Spanish Constitution

2. Members of the Armed Forces or Institutes or bodies subject to military discipline may only exercise this right individually and in accordance with the provisions of the legislation pertaining to them.

Section 2. Rights and Duties of Citizens

Article 30.

1. Citizens have the right and the duty to defend Spain.
2. The law shall determine the military obligations of Spaniards and shall regulate, with the proper safeguards, conscientious objection as well as other grounds for exemption from compulsory military service; it may also, when appropriate, impose a form of social service in lieu thereof.
3. A civilian service may be established with a view to accomplishing objectives of general interest.
4. The duties of citizens in the event of grave risk, catastrophe or public calamity may be regulated by law.

Article 31.

1. Everyone shall contribute to sustain public expenditure in proportion to his or her financial means, through a just and progressive system of taxation based on principles of equality, which shall in no case be confiscatory in nature.
2. Public expenditure shall be incurred in such a way that an equitable allocation of public resources may be achieved, and its planning and execution shall comply with criteria of efficiency and economy.
3. Personal or property contributions for public purposes may only be imposed in accordance with the law.

Article 32.

1. Men and women have the right to marry with full legal equality.
2. The law shall regulate the forms of marriage, the age at which it may be entered into and the required capacity therefore, the rights and duties of the spouses, the grounds for separation and dissolution, and the consequences thereof.

Article 33.

1. The right to private property and inheritance is recognised.
2. The content of these rights shall be determined by the social function which they fulfil, in accordance with the law.
3. No one may be deprived of his or her property and rights, except on justified grounds of public utility or social interest and with a proper compensation in accordance with the provisions of the law.

Article 34.

1. The right to set up foundations for purposes of general interest is recognised, in accordance with the law.
2. The provisions of clauses 2 and 4 of Article 22 shall also be applicable to foundations.

Article 35.

1. All Spaniards have the duty to work and the right to employment, to free choice of profession or trade, to advancement through their work, and to sufficient remuneration for the satisfaction of their needs and those of their families; moreover, under no circumstances may they be discriminated against on account of their gender.
2. The law shall establish a Workers' Statute.

§ 2 The Spanish Constitution

Article 36.

The law shall regulate the special features of the legal status of Professional Associations and the exercise of the professions requiring academic degrees. The internal structure and operation of the Associations must be democratic.

Article 37.

1. The law shall guarantee the right to collective labour bargaining between worker and employer representatives, as well as the binding force of the agreements.

2. The right of workers and employers to adopt collective labour dispute measures is hereby recognised. The law regulating the exercise of this right shall, without prejudice to the restrictions which it may establish, include the safeguards necessary to ensure the operation of essential community services.

Article 38.

Free enterprise is recognised within the framework of a market economy. The public authorities shall guarantee and protect its exercise and the safeguarding of productivity in accordance with the demands of the economy in general and, as the case may be, of its planning.

CHAPTER THREE

Governing Principles of Economic and Social Policy

Article 39.

1. The public authorities shall ensure the social, economic and legal protection of the family.

2. The public authorities likewise shall ensure full protection of children, who are equal before the law, irrespective of their parentage and the marital status of the mothers. The law shall provide for the investigation of paternity.

3. Parents must provide their children, whether born within or outside wedlock, with assistance of every kind while they are still under age and in other circumstances in which the law is applicable.

4. Children shall enjoy the protection provided for in the international agreements which safeguard their rights.

Article 40.

1. The public authorities shall promote favourable conditions for social and economic progress and for a more equitable distribution of personal and regional income within the framework of a policy of economic stability. They shall devote special attention to carrying out a policy directed towards full employment.

2. Likewise, the public authorities shall foster a policy guaranteeing vocational training and retraining; they shall ensure workplace safety and hygiene and shall guarantee adequate rest by means of a limited working day, periodic paid holidays, and the promotion of suitable centres.

Article 41.

The public authorities shall maintain a public Social Security system for all citizens which will guarantee adequate social assistance and benefits in situations of hardship, especially in cases of unemployment. Supplementary assistance and benefits shall be optional.

Article 42.

The State shall be especially concerned with safeguarding the economic and social rights of Spanish workers abroad, and shall direct its policy towards securing their return.

§ 2 The Spanish Constitution

Article 43.

1. The right to health protection is recognised.
2. It is incumbent upon the public authorities to organise and safeguard public health by means of preventive measures and the necessary benefits and services. The law shall establish the rights and duties of all concerned in this respect.
3. The public authorities shall promote health education, physical education and sports. Likewise, they shall encourage the proper use of leisure time.

Article 44.

1. The public authorities shall promote and watch over access to cultural opportunities, to which all are entitled.
2. The public authorities shall promote science and scientific and technical research for the benefit the general interest.

Article 45.

1. Everyone has the right to enjoy an environment suitable for personal development, as well as the duty to preserve it.
2. The public authorities shall safeguard rational use of all natural resources with a view to protecting and improving the quality of life and preserving and restoring the environment, by relying on essential collective solidarity.
3. Criminal or, where applicable, administrative sanctions, as well as the obligation to make good the damage, shall be imposed, under the terms established by the law, against those who violate the provisions contained in the previous clause.

Article 46.

The public authorities shall guarantee the preservation and promote the enrichment of the historic, cultural and artistic heritage of the peoples of Spain and of the property of which it consists, regardless of its legal status and its ownership. Offences committed against this heritage shall be punished under criminal law.

Article 47.

All Spaniards are entitled to enjoy decent and adequate housing. The public authorities shall promote the necessary conditions and shall establish appropriate standards in order to make this right effective, regulating land use in accordance with the general interest in order to prevent speculation.

The community shall participate in the benefits accruing from the urban policies of the public bodies.

Article 48.

The public authorities shall promote conditions directed towards the free and effective participation of young people in political, social, economic and cultural development.

Article 49.

1. Persons with disabilities exercise the rights provided for in this Title under conditions of real and effective freedom and equality. The special protection necessary to exercise the rights shall be governed by law.
2. The public authorities shall advance policies to ensure full individual autonomy and social inclusion of persons with disabilities, in environments with accessibility for all, and shall also promote the participation of its organisations, in such terms as the law provides. Priority shall be given to meeting the specific needs of women and children with disability.

Article 50.

The public authorities shall guarantee, through adequate and periodically updated pensions, sufficient financial means for senior citizens.

§ 2 The Spanish Constitution

Likewise, and independently of the obligations of their families towards them, they shall promote their welfare through a system of social services which shall provide for their specific problems of health, housing, culture and leisure.

Article 51.

1. The public authorities shall guarantee the protection of consumers and users and shall, by means of effective measures, safeguard their safety, health and legitimate financial interests.

2. The public authorities shall make means available to inform and educate consumers and users, shall foster their organisations, and shall provide hearings for such organisations on all matters affecting their members, under the terms to be established by law.

3. Within the framework of the provisions of the foregoing clauses, the law shall regulate domestic trade and the system of licensing commercial products.

Article 52.

The law shall regulate professional organisations which contribute to the defence of their own economic interests. Their internal structure and operation must be democratic.

CHAPTER FOUR

Guarantee of Fundamental Rights and Liberties

Article 53.

1. The rights and liberties recognised in Chapter Two of the present Title are binding for all public authorities. The exercise of such rights and liberties, which shall be protected in accordance with the provisions of Article 161, 1a), may be regulated only by law which shall, in any case, respect their essential content.

2. Any citizen may assert his or her claim to the protect the liberties and rights recognised in Article 14 and in Section 1 of Chapter Two, by means of a preferential and summary procedure in the ordinary courts and, when appropriate, by submitting an individual appeal for protection («recurso de amparo») to the Constitutional Court. This latter procedure shall be applicable to conscientious objection as recognised in Article 30.

3. The substantive legislation, judicial practice and actions of the public authorities shall be based on the recognition, respect and protection of the principles recognised in Chapter Three. The latter may only be invoked in the ordinary courts in the context of the legal provisions by which they are developed.

Article 54.

An organic law shall regulate the institution of Ombudsman the People, who shall be a high commissioner of the Cortes Generales, appointed by them to defend the rights contained in this Title; for this purpose he may supervise Administration activities and report thereon to the Cortes Generales.

CHAPTER FIVE

Suspension of Rights and Liberties

Article 55.

1. The rights recognised in Articles 17 and 18, clauses 2 and 3, Articles 19 and 20, clause 1, subclauses, a) and d) and clause 5, Articles 21 and 28, clause 2, and Article 37, clause 2, may be suspended when the state of emergency or siege (martial law) is declared under the terms provided in the Constitution. Clause 3 of Article 17 is excepted from the foregoing provisions in the event of the proclamation of a state of emergency.

2. An organic law may determine the manner and the circumstances in which, on an individual basis and with the necessary participation of the Courts and proper Parliamentary control, the rights recognised in Articles 17, clause 2, and 18, clauses 2 and 3, may be

§ 2 The Spanish Constitution

suspended as regards specific persons in connection with investigations of the activities of armed bands or terrorist groups.

Unjustified or abusive use of the powers recognised in the foregoing organic law shall give rise to criminal liability where it is a violation of the rights and liberties recognised by the law.

PART II

The Crown

Article 56.

1. The King is the Head of State, the symbol of its unity and permanence. He arbitrates and moderates the regular functioning of the institutions, assumes the highest representation of the Spanish State in international relations, especially with those nations belonging to the same historic community, and exercises the functions expressly conferred on him by the Constitution and the law.

2. His title is King of Spain, and he may use the other titles appertaining to the Crown.

3. The person of the King is inviolable and shall not be held accountable. His acts shall always be countersigned in the manner established in Article 64. Without such countersignature they shall not be valid, except as provided under Article 65,2.

Article 57.

1. The Crown of Spain shall be inherited by the successors of H.M. Juan Carlos I de Borbon, the legitimate heir of the historic dynasty. Succession to the throne shall follow the regular order of primogeniture and representation, in the following order of precedence: the earlier shall precede the later lines; within the same line, the closer degree shall precede the more distant; within the same degree, the male shall precede the female; and for the same sex, the older shall precede the younger.

2. The Crown Prince, from the time of his birth or the event conferring this position upon him, shall hold the title of Prince of Asturias and the other titles traditionally held by the heir to the Crown of Spain.

3. Should all the lines designated by law become extinct, the Cortes Generales shall provide for the succession to the Crown in the manner most suited to the interests of Spain.

4. Those persons with a right to succession to the Throne who marry against the express prohibition of the King and the Cortes Generales, shall be excluded from succession to the Crown, as shall their descendants.

5. Abdications and renunciations and any doubt concerning a fact or the law that may arise in connection with the succession to the Crown shall be resolved by an organic law.

Article 58.

The Queen Consort, or the consort of the Queen, may not assume any constitutional functions, except in accordance with the provisions by the Regency.

Article 59.

1. In the event of the King being under age, the father or mother of the King or, in default thereof, the relative of legal age who is nearest in succession to the Crown, according to the order established in the Constitution, shall immediately assume the office of Regent, which he shall exercise until the Prince reaches adulthood.

2. If the King becomes incapable of exercising his authority, and this incapacity is recognised by the Cortes Generales, the Crown Prince shall immediately assume the powers of the Regency, if he is of age. If he is not, the procedure outlined in the foregoing clause shall be followed until the Prince reaches adulthood.

3. If there is no person entitled to assume the Regency, it shall be appointed by the Cortes Generales and shall be composed of one, three or five persons.

4. In order to exercise the Regency, it is necessary to be Spanish and legally of age.

§ 2 The Spanish Constitution

5. The Regency shall be exercised by constitutional mandate, and always on behalf of the King.

Article 60.

1. The guardian of the King during his minority shall be the person designated in the will of the late King, provided that he is of age and Spanish by birth. If a guardian has not been designated, the father or mother shall be guardian, as long as he or she remains a widower or widow, as the case may be. In default thereof, the guardian shall be appointed by the Cortes Generales, but the offices of Regent and Guardian may not be held by the same person, except by the father, mother or direct ascendants of the King.

2. Exercise of the guardianship is also incompatible with the holding of any office or political representation.

Article 61.

1. The King, on being proclaimed before the Cortes Generales, shall take oath to carry out his duties faithfully, to obey the Constitution and the law and ensure that they are obeyed by, and to respect the rights of citizens and the Autonomous Communities.

2. The Crown Prince, on coming of age, and the Regent or Regents, on assuming office, shall take the same oath, as well as that of loyalty to the King.

Article 62.

It is incumbent upon the King:

- a) to sanction and promulgate the laws;
- b) to summon and dissolve the Cortes Generales and to call elections under the terms provided in the Constitution;
- c) to call a referendum in the circumstances provided in the Constitution;
- d) to propose a candidate for President of the Government and, as the case may be, appoint him or remove him from office, as provided in the Constitution.
- e) to appoint and dismiss members of the Government on the proposal of its President;
- f) to issue the decrees agreed upon by the Council of Ministers, to confer civil and military positions and award honours and distinctions in conformity with the law;
- g) to be informed regarding affairs of State and, for this purpose, to preside over the meetings of the Council of Ministers whenever he deems opportune, at the request of the President of the Government;
- h) to exercise supreme command of the Armed Forces;
- i) to exercise the right to grant pardons in accordance with the law, which may not authorise general pardons;
- j) to exercise the High Patronage of the Royal Academies.

Article 63.

1. The King accredits ambassadors and other diplomatic representatives. Foreign representatives in Spain are accredited to him.

2. It is incumbent upon the King to express the State's assent to the entering into of international commitments through treaties, in conformity with the Constitution and the law.

3. It is incumbent on the King, following authorisation by the Cortes Generales, to declare war and to make peace.

Article 64.

1. The acts of the King shall be countersigned by the President of the Government and, where appropriate, by the competent ministers. The nomination and appointment of the President of the Government and the dissolution provided under Article 99, shall be countersigned by the Speaker of Congress.

2. Those countersigning the acts of the King shall be liable for them.

§ 2 The Spanish Constitution

Article 65.

1. The King receives an overall amount from the State Budget for the upkeep of his Family and Household and distributes it freely.

2. The King freely appoints and dismisses the civil and military members of his Household.

PART III

The Cortes Generales

CHAPTER ONE

The Houses of Parliament

Article 66.

1. The Cortes Generales represent the Spanish people and consist of the Congress of Deputies and the Senate.

2. The Cortes Generales exercise the legislative power of the State, approve its Budget, control Government action and hold all the other powers vested in them by the Constitution.

3. The Cortes Generales are inviolable.

Article 67.

1. No person may be a member of both Houses simultaneously, or be a representative in the Assembly of an Autonomous Community and a Deputy to Congress at the same time.

2. The members of the Cortes Generales shall not be bound by a compulsory mandate.

3. Meetings of members of Parliament which are held without having been called in the statutory manner shall not be binding on the Houses, and members may not exercise their functions therein nor enjoy the privileges deriving from their office.

Article 68.

1. Congress consists of a minimum of three hundred and a maximum of four hundred Deputies, elected by universal, free, equal, direct and secret suffrage, under the terms established by law.

2. The electoral district is the province. The cities of Ceuta and Melilla shall each be represented by one Deputy. The total number of Deputies shall be distributed in accordance with the law, with each electoral district being assigned a minimum initial representation and the remainder being distributed in proportion to the population.

3. The election in each electoral district shall be conducted on the basis of proportional representation.

4. Congress is elected for four years. The term of office of the Deputies ends four years after their election or on the day that the House is dissolved.

5. All Spaniards who are entitled to the full exercise of their political rights are electors and eligible for election.

The law shall recognise and the State shall facilitate the exercise of the right to vote of Spaniards who are outside Spanish territory.

6. Elections shall take place between thirty and sixty days after the end of the previous term of office. The Congress so elected must be convened within twenty five days following the holding of elections.

Article 69.

1. The Senate is the House of territorial representation.

2. In each province, four Senators shall be elected by the voters thereof by universal, free, equal, direct and secret suffrage, under the terms established by an organic law.

3. In the island provinces, each island with a «Cabildo» or Island Council shall constitute an electoral district for the purpose of electing Senators, of whom there shall be three for

§ 2 The Spanish Constitution

each of the larger islands –Gran Canaria, Mallorca and Tenerife– and one for each of the following islands: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote and La Palma.

4. The cities of Ceuta and Melilla shall each elect two Senators.

5. The Autonomous Communities shall, moreover, nominate one Senator and a further Senator for each million inhabitants in their respective territories. The nomination shall be incumbent upon the Legislative Assembly or, in default thereof, upon the Autonomous Community's highest corporate body, in accordance with the provisions of the Statutes, which shall, in any case, guarantee adequate proportional representation.

6. The Senate is elected for four years. The Senators' term of office shall end four years after their election or on the day that the House is dissolved.

Article 70.

1. The electoral law shall establish grounds for inelegibility and incompatibility for Deputies and Senators, which shall in any case include those who are:

- a) members of the Constitutional Court;
- b) the holders of high State administrative offices, as determined by law, with the exception of members of the Government;
- c) the Ombudsman;
- d) Magistrates, Judges and Public Prosecutors when in office;
- e) professional soldiers and members of the Security and Police Forces and Corps on active duty;
- f) members of the Electoral Commissions.

2. The validity of the certificates of election and credentials of the members of both Houses shall be subject to judicial control, under the terms to be established by the electoral law.

Article 71.

1. Deputies and Senators shall enjoy indemnity for opinions expressed when in office.

2. During their terms of office, Deputies and Senators shall likewise enjoy immunity and may only be arrested in the event of delicto flagrante. They may be neither indicted nor tried without prior authorisation of the respective Houses.

3. In criminal proceedings brought against Deputies and Senators, the competent court shall be the Criminal Section of the Supreme Court.

4. Deputies and Senators shall receive a salary to be fixed by the respective Houses.

Article 72.

1. The Houses establish their own Standing Orders, adopt their budgets autonomously and, by common agreement, regulate the Personnel Statutes of the Cortes Generales. The Standing Orders and any alteration thereof shall be subject in their entirety to a final vote, which shall require an absolute majority.

2. The Houses elect their respective Speaker and the other members of their committees. Joint sessions shall be presided over by the Speaker of Congress and shall be governed by the Standing Orders of the Cortes Generales passed by absolute majority of the members of each House.

3. The Speakers of the Houses exercise on behalf of the latter all administrative powers and disciplinary functions within their respective Houses.

Article 73.

1. The Houses shall meet annually for two ordinary sessions: the first from September to December, and the second from February to June.

2. The Houses may meet in extraordinary session at the request of the Government, of the Permanent Deputation or of the absolute majority of members of either of the Houses. Extraordinary sessions must be convened with a specific agenda and shall be adjourned once has been dealt with.

§ 2 The Spanish Constitution

Article 74.

1. The Houses shall meet in joint session in order to exercise the non-legislative powers expressly conferred upon the Cortes Generales by Title II.

2. The decisions of the Cortes Generales outlined in Articles 94.1, 145.2 and 158.2 shall be passed by majority vote of each of the Houses. In the first case, the procedure shall be initiated by Congress, and in the remaining two by the Senate. In both cases, if an agreement is not reached between the Senate and Congress, an attempt to reach agreement shall be made by a Joint Commission consisting of an equal number of Deputies and Senators. The Commission shall submit a text which shall be voted on by both Houses. If this is not passed in the established manner, Congress shall decide by absolute majority.

Article 75.

1. The Houses shall convene in Plenary Sessions and in Committees.

2. The Houses may delegate to the Standing Legislative Committees the approval of governmental or non-governmental bills. However, the Plenum may at any time demand a debate and vote on any governmental or non-governmental bill which has been the object of this delegation.

3. Excluded from the provisions of the foregoing paragraph are constitutional reform, international affairs, organic and basic laws and the General State Budget.

Article 76.

1. Congress and the Senate and, when appropriate, both Houses jointly, may appoint fact-finding committees on any matter of public interest. Their conclusions shall not be binding on the Courts, nor shall they affect judicial decisions, notwithstanding the fact that the results of investigations may be referred to the Public Prosecutor for him to take appropriate action whenever necessary.

2. It shall be compulsory to appear when summoned by the Houses. Penalties which may be imposed for failure to comply with this obligation shall be established by law.

Article 77.

1. The Houses may receive individual and collective petitions, always in writing; direct submission by citizens' demonstrations is prohibited.

2. The Houses may refer the petitions that they receive to the Government. The Government is obliged to provide an explanation regarding their content, when required to do so by the Houses.

Article 78.

1. In each House there shall be a Permanent Deputation («Diputación Permanente») consisting of a minimum of twenty-one members who shall represent the Parliamentary groups in proportion to their numerical importance.

2. The Permanent Deputation shall be presided over by the Presidents of the respective Houses and their functions shall be: that provided in Article 73 which consists of assuming the powers of the Houses in accordance with Articles 85 and 116 in the event that the latter have been dissolved or that their terms have expired, and that of safeguarding the powers of the Houses when they are not in session.

3. On the expiration of the term of the Cortes Generales, or in case of dissolution, the Permanent Deputation shall continue to perform their functions until the new Cortes Generales are constituted.

4. When the House concerned meets, the Permanent Deputation shall report on the matters dealt with and on its decisions.

Article 79.

1. In order to adopt resolutions, the Houses must have met in a statutory manner, with a majority of their members present.

§ 2 The Spanish Constitution

2. In order to be valid, these resolutions must be passed by the majority of the members present, without prejudice to the special majorities that may be established by the Constitution or the organic laws and those which are established by the Standing Orders of the Houses.

3. The votes of Senators and Deputies are personal and may not be delegated.

Article 80.

The plenary sessions of the Houses shall be public, except when otherwise decided by each House by absolute majority, or in accordance with the Standing Orders.

CHAPTER TWO

Drafting of Laws

Article 81.

1. Organic laws are those relating to the development of fundamental rights and public liberties, those which establish Statutes of Autonomy and the general electoral system, and other laws provided in the Constitution.

2. The passing, amendment or repeal of the organic laws shall require an absolute majority of the members of Congress in a final vote on the bill as a whole.

Article 82.

1. The Cortes Generales may delegate to the Government the power to issue rules with the force of law on specific matters not included in the foregoing article.

2. Legislative delegation must be granted by means of a basic law when its purpose is that of drawing up texts comprising various articles, or by an ordinary law when it is a matter of consolidating several legal texts into one.

3. Legislative delegation must be expressly granted to the Government for specific purposes and with a fixed time limit for its exercise. The delegation shall expire when the Government, having availed itself thereof, has published the appropriate regulations. It may not be construed as having been granted implicitly or for an indeterminate period. Nor shall subdelegation to authorities other than the Government itself be authorized.

4. Basic laws shall precisely define the purpose and scope of legislative delegation, as well as the principles and criteria to be followed in exercising it.

5. Authorisation for revising legal texts shall determine the legislative scope implicit in the initiative, specifying if it is restricted to the mere formulation of a single text or whether it covers regulating, clarifying and harmonising the legal texts that are to be consolidated.

6. Initiatives may establish additional control formulas in each case, without prejudice to the jurisdiction of the Courts.

Article 83.

The basic laws may in no case:

- a) authorise the modification of the basic law itself;
- b) grant power to enact retroactive regulations.

Article 84.

In the event that a non-governmental law or amendment is contrary to currently valid legislative initiative, the Government may oppose its passage. In this case, a non-governmental law may be submitted for the total or partial repeal of the initiative.

Article 85.

Government provisions containing delegated legislation shall be entitled «Legislative Decrees».

§ 2 The Spanish Constitution

Article 86.

1. In cases of extraordinary and urgent need, the Government may issue temporary legislative provisions which shall take the form of decree-laws and which may not affect the regulation of the basic State institutions, the rights, duties and liberties contained in Title 1, the system of the Autonomous Communities, or the General Electoral Law.

2. The decree-laws must be submitted forthwith to the Congress of Deputies, which must be summoned for this purpose if not already in session. They must be debated and voted upon in their entirety within thirty days after their promulgation. Congress must expressly declare itself in favour of ratification or repeal within said period of time, for which purpose the Standing Orders shall establish a special summary procedure.

3. During the period established in the foregoing clause, their passage through the Cortes may be the same as for Government bills, by means of the emergency procedure.

Article 87.

1. The Government, the Congress and the Senate are competent to propose legislation, in accordance with the Constitution and the Standing Orders of the Houses.

2. The Assemblies of the Autonomous Communities may request the Government to pass a bill or refer a non-governmental bill to the Congressional Steering Committee and to delegate a maximum of three Assembly members to defend it.

3. An organic law shall establish the manner in which popular initiative in connection with the submitting of non-governmental bills shall be regulated, as well as the requirements therefore. In any case, no fewer than 500,000 authenticated signatures shall be required. This initiative may not touch on matters concerning organic law, taxation, international affairs or the prerogative of granting pardons.

Article 88.

Government bills shall be passed by the Council of Ministers, which shall refer them to Congress, accompanied by a statement setting forth the necessary grounds and facts in order for them to reach a decision thereon.

Article 89.

1. The passage of non-governmental bills shall be regulated by the Standing Orders of the Houses in such a way that the priority attached to Government bills shall not prevent the exercise of the right to propose legislation under the terms laid down in Article 87.

2. Non-governmental bills which, in accordance with Article 87 are considered by the Senate, shall be referred to Congress for enactment.

Article 90.

1. Once an ordinary or organic governmental bill has been passed by the Congress of Deputies, the Speaker of Congress shall immediately report on it to the Speaker of the Senate, who shall submit it to the latter for its consideration.

2. Within two months of receiving the text, the Senate may, by means of a considered opinion, veto it or introduce amendments. The veto must be passed by an absolute majority. The bill may not be submitted to the King for his assent unless, in the event of veto, Congress has ratified the initial text by an absolute majority (or by simple majority if two months have elapsed since its introduction), or has reached a decision relative to the amendments, accepting them or not by simple majority.

3. The period of two months allowed to the Senate for vetoing or amending a bill shall be reduced to twenty calendar days for bills declared by the Government or the Congress of Deputies to be urgent.

Article 91.

The King shall, within a period of fifteen days, give his assent to the laws passed by the Cortes Generales, and shall promulgate them and order their immediate publication.

§ 2 The Spanish Constitution

Article 92.

1. Political decisions of special importance may be submitted to all citizens in a consultative referendum.
2. The referendum shall be called by the King at the proposal of the President of the Government, following authorisation by the Congress of Deputies.
3. An organic law shall regulate the terms and procedures for the different kinds of referendum provided for in this Constitution.

CHAPTER THREE

International Treaties

Article 93.

By means of an organic law, authorisation may be granted for concluding treaties by which powers derived from the Constitution shall be vested in an international organisation or institution. It is incumbent on the Cortes Generales or the Government, as the case may be, to guarantee compliance with these treaties and with the resolutions emanating from the international and supranational organisations in which the powers have been vested.

Article 94.

1. Before contracting obligations by means of treaties or agreements, the State shall require the prior authorisation of the Cortes Generales in the following cases:
 - a) treaties of a political nature;
 - b) treaties or agreements of a military nature;
 - c) treaties or agreements affecting the territorial integrity of the State or the fundamental rights and duties established under Title I;
 - d) treaties or agreements which imply financial liabilities for the Public Treasury;
 - e) treaties or agreements which involve amendment or repeal of some law or require legislative measures for their execution.
2. Congress and the Senate shall be informed forthwith regarding the conclusion of other treaties or agreements.

Article 95.

1. The conclusion of any international treaty containing stipulations contrary to the Constitution shall require prior Constitutional amendment.
2. The Government, or either of the Houses may request the Constitutional Court to declare whether or not there is a contradiction.

Article 96.

1. Validly concluded international treaties, once officially published in Spain, shall form part of the internal legal order. Their provisions may only be repealed, amended or suspended in the manner provided in the treaties themselves or in accordance with the general rules of international law.
2. The same procedure shall be used for denouncing international treaties and agreements as that, provided in Article 94, for entering into them.

PART IV

Government and Administration

Article 97.

The Government directs domestic and foreign policy, civil and military administration and the defence of the State. It exercises executive and statutory authority in accordance with the Constitution and the law.

§ 2 The Spanish Constitution

Article 98.

1. The Government consists of the President, Vice-Presidents, when applicable, Ministers and other members as may be created by law.

2. The President directs Government action and coordinates the functions of the other members thereof, without prejudice to the competence and direct responsibility of the latter in carrying out their duties.

3. Members of the Government may not exercise representative functions other than those derived from their Parliamentary mandate, nor any other public function not derived from their office, nor engage in any professional or commercial activity whatsoever.

4. The status and incompatibilities of the members of the Government shall be regulated by law.

Article 99.

1. After renewal of the Congress of Deputies, and in other cases provided under the Constitution, the King, after consultation with the representatives appointed by the political groups with Parliamentary representation, and through the Speaker of Congress, shall nominate a candidate for President of the Government.

2. The candidate nominate in accordance with the provisions of the foregoing paragraph shall submit to the Congress of Deputies the political programme of the Government that he intends to form and shall seek the confidence of the Houses.

3. If the Congress of Deputies, by vote of the absolute majority of its members, invests said candidate with its confidence, the King shall appoint him President. If an absolute majority is not obtained, the same proposal shall be submitted for a new vote forty-eight hours after the previous vote, and it shall be considered that confidence has been secured if it passes by a simple majority.

4. If, after this vote, confidence for the investiture has not been obtained, successive proposals shall be voted upon in the manner provided in the foregoing paragraphs.

5. If within two months after the first vote for investiture no candidate has obtained the confidence of Congress, the King shall dissolve Congress and call new elections, following endorsement by the Speaker of Congress.

Article 100.

The other members of the Government shall be appointed and dismissed by the King on the proposal of the President.

Article 101.

1. The Government shall resign after the holding of general elections, in the event of loss of Parliamentary confidence as provided in the Constitution, or on account of the resignation or death of the President.

2. The outgoing Government shall continue in power until the new Government takes office.

Article 102.

1. The President and other members of the Government shall be held criminally liable, should the occasion arise, before the Criminal Section of the Supreme Court.

2. If the charge is of treason or of any offence against the security of the State committed in the exercise of their office, it may only be brought on the initiative of one quarter of the members of Congress and with the approval of the absolute majority thereof.

3. The Royal prerogative of pardon shall not be applicable in any of the cases provided for under the present article.

Article 103.

1. The public Administration serves the general interest with objectivity and acts in accordance with the principles of efficiency, hierarchy, decentralisation, deconcentration and coordination, being fully subject to justice and the law.

§ 2 The Spanish Constitution

2. The organs of State Administration are created, directed and coordinated in accordance with the law.

3. The law shall regulate the status of civil servants, entry into the civil service in accordance with the principles of merit and ability, the special features of the exercise of their right to union membership, the system of incompatibilities, and guarantees regarding impartiality in the exercise of their duties.

Article 104.

1. The Security Forces and Corps serving under the Government shall have as their mission the protection of the free exercise of rights and liberties and the guaranteeing of the safety of citizens.

2. An organic law shall determine the duties, basic principles of action and statutes of the Security Forces and Corps.

Article 105.

The law shall regulate:

a) the hearing of citizens directly, or through the organisations and associations recognised by law, in the process of drawing up the administrative provisions which affect them;

b) the access of citizens to administrative files and records, except as they may concern the security and defence of the State, the investigation of crimes and the privacy of individuals;

c) the procedures for the taking of administrative action, guaranteeing the hearing of interested parties when appropriate.

Article 106.

1. The Courts control the power to issue regulations and to ensure that the rule of law prevails in administrative action, as well as to ensure that the latter is subordinated to the ends which justify it.

2. Private individuals shall, under the terms established by law, be entitled to compensation for any loss that they may suffer to their property or rights, except in cases of force majeure, whenever such loss is the result of the operation of public services.

Article 107.

The Council of State is the supreme consultative body of the Government. An organic law shall regulate its composition and competence.

PART V

Relations between the Government and the Cortes Generales

Article 108.

The Government is jointly accountable to the Congress of Deputies for its political management.

Article 109.

The Houses and their Committees may, through their respective Speakers, request whatever information and help they may need from the Government and Government Departments and from any authorities of the State and of the Autonomous Communities.

Article 110.

1. The Houses and their Commissions may summon members of the Government.

§ 2 The Spanish Constitution

2. Members of the Government are entitled to attend meetings of the Houses and their Commissions and to be heard in them, and may request that officials from their Departments report to them.

Article 111.

1. The Government and each of its members are subject to interpellations and questions put to them in the Houses. The Standing Orders shall establish a minimum weekly period for this type of debate.

2. Any interpellation may give rise to a motion in which the House makes known its position.

Article 112.

The President of the Government, after deliberation by the Council of Ministers, may ask Congress for a vote of confidence in favour of his programme or of a general policy statement. Confidence shall be considered to have been obtained when a simple majority of the Deputies vote in favour.

Article 113.

1. The Congress of Deputies may challenge Government policy by passing a motion of censure by an absolute majority of its members.

2. The motion of censure must be proposed by at least one tenth of the Deputies, including a candidate for the office of President of the Government.

3. The motion of censure may not be voted on until five days after it has been submitted. During the first two days of this period, alternative motions may be submitted.

4. If the motion of censure is not passed by the Congress, its signatories may not submit another during the same session.

Article 114.

1. If Congress withholds its confidence from the Government, the latter shall submit its resignation to the King, whereafter a President of the Government shall be nominated in accordance with the provisions of Article 99.

2. If Congress passes a motion of censure, the Government shall submit its resignation to the King, while the candidate proposed in the motion of censure shall be considered to have the confidence of the House for the purposes provided in Article 99. The King shall appoint him or her President of the Government.

Article 115.

1. The President of the Government, after deliberation by the Council of Ministers, and under his or her own exclusive responsibility, may propose the dissolution of Congress, the Senate or the Cortes Generales, which shall be decreed by the King. The decree of dissolution shall establish the date for the elections.

2. The proposal for dissolution may not be submitted while a motion for censure is pending.

3. There shall be no further dissolution until a year has elapsed since the previous one, except as provided for in Article 99, clause 5.

Article 116.

1. An organic law shall regulate the states of alarm, emergency and siege (martial law) and the corresponding competences and limitations.

2. A state of alarm shall be declared by the Government, by means of a decree decided upon by the Council of Ministers, for a maximum period of fifteen days. The Congress of Deputies shall be informed and must meet immediately for this purpose. Without their authorisation the said period may not be extended. The decree shall specify the territorial area to which the effects of the proclamation shall apply.

§ 2 The Spanish Constitution

3. A state of emergency shall be declared by the Government by means of a decree decided upon by the Council of Ministers, after prior authorisation by the Congress of Deputies. The authorisation for and declaration of a state of emergency must specifically state the effects thereof, the territorial area to which it is to apply and its duration, which may not exceed thirty days, subject to extension for a further thirty-day period, with the same requirements.

4. A state of siege (martial law) shall be declared by absolute majority of the Congress of Deputies, exclusively at the proposal of the Government. Congress shall determine its territorial extension, duration and terms.

5. Congress may not be dissolved while any of the states referred to in the present article remain in operation, and if the Houses are not in session, they must automatically be convened. Their functioning, as well as that of the other constitutional State authorities, may not be interrupted while any of these states are in operation.

In the event that Congress has been dissolved or its term has expired, if a situation giving rise to any of these states should occur, the powers of Congress shall be assumed by its Standing Committee.

6. Proclamation of states of alarm, emergency and siege shall not modify the principle of liability of the Government or its agents as recognised in the Constitution and the law.

PART VI

Judicial Power

Article 117.

1. Justice emanates from the people and is administered on behalf of the King by Judges and Magistrates of the Judiciary who shall be independent, irremovable, and liable and subject only to the rule of law.

2. Judges and Magistrates may only be dismissed, suspended, transferred or retired on the grounds, and subject to the guarantees provided by law.

3. The exercise of judicial authority in any kind of action, both in passing judgment and having judgments executed, lies exclusively within the competence of the Courts and Tribunals established by the law, in accordance with the rules of jurisdiction and procedure which may be established therein.

4. The Courts and Tribunals shall exercise only the powers indicated in the foregoing clause and those which are expressly allocated to them by law as a guarantee of some right.

5. The principle of jurisdictional unity is the basis of the organisation and operation of the Courts. The law shall regulate the exercise of military jurisdiction strictly within military limits and in cases of state of siege (martial law), in accordance with the principles of the Constitution.

6. Courts of exception are prohibited.

Article 118.

1. It is compulsory to execute the sentences and other final judgments of Judges and Courts, as well as to collaborate with them as they may require during the course of trials and execution of judgments.

Article 119.

Justice shall remain free when thus provided by law, and shall in any case be so in respect to those who have insufficient means to litigate.

Article 120.

1. Judicial proceedings shall be public, with the exception of those provided for in the laws of procedure.

2. Proceedings shall be predominantly oral, especially in criminal cases.

§ 2 The Spanish Constitution

3. Judgments shall always contain the grounds therefore, and they shall be delivered in a public hearing.

Article 121.

Damages caused by judicial errors as well as those arising from irregularities in the administration of justice, shall be subject to compensation by the State, in accordance with the law.

Article 122.

1. The Organic Law of the Judiciary shall determine the setting up, operation and control of the Courts and Tribunals as well as the legal status of professional Judges and Magistrates, who shall form a single body, and of the staff serving in the administration of justice.

2. The General Council of the Judiciary is its governing body. An organic law shall set up its statutes and the system of incompatibilities applicable to its members and their functions, especially in connection with appointments, promotions, inspection and the disciplinary system.

3. The General Council of the Judiciary shall consist of the President of the Supreme Court, who shall preside it, and of twenty members appointed by the King for a five-year term, amongst whom shall be twelve judges and magistrates of all judicial categories, under the terms established by the organic law; four nominated by the Congress of Deputies and four by the Senate, elected in both cases by three-fifths of their members from amongst lawyers and other jurists of acknowledged competence and over fifteen years of professional experience.

Article 123.

1. The Supreme Court, with jurisdiction over the whole of Spain, is the highest judicial body in all branches of justice, except with regard to the provisions concerning Constitutional guarantees.

2. The President of the Supreme Court shall be appointed by the King, on being proposed by the General Council of the Judiciary, in the manner to be established by the law.

Article 124.

1. The Office of the Public Prosecutor, without prejudice to the functions entrusted to other bodies, has as its mission that of promoting the operation of justice in the defence of the rule of law, of citizens' rights and of the public interest as safeguarded by the law, whether ex officio or at the request of interested parties, as well as that of protecting the independence of the Courts and securing through them the satisfaction of social interest.

2. The Office of Public Prosecutor exercises its duties through its own bodies in accordance with the principles of unity of action and hierarchical dependency, subject in all cases to the principles of the rule of law and of impartiality.

3. The organic statute of the Office of the Public Prosecutor shall be regulated by law.

4. The State Public Prosecutor shall be appointed by the King on being nominated by the Government, after consultation with the General Council of the Judiciary.

Article 125.

Citizens may engage in popular action and participate in the administration of justice through the institution of the Jury, in the manner and with respect to those criminal trials as may be determined by law, as well as in customary and traditional courts.

Article 126.

The judicial police are answerable to the Judges, the Courts and the Public Prosecutor when exercising their duties of crime detection and the discovery and apprehension of criminals, under the terms to be established by the law.

§ 2 The Spanish Constitution

Article 127.

1. Judges and Magistrates, as well as Public Prosecutors, whilst actively in office, may not hold other public office nor belong to political parties or trade unions. The law shall lay down the system and methods of professional association for Judges, Magistrates and Prosecutors.

2. The law shall establish the system of incompatibilities for members of the Judiciary, which must ensure their total independence.

PART VII

Economy and Finance

Article 128.

1. The entire wealth of the country in its different forms, irrespective of its ownership, is subordinate to the general interest.

2. Public initiative in economic activity is recognised. Essential resources or services may be restricted by law to the public sector, especially in the case of monopolies. Likewise, intervention in companies may be decided upon when the public interest so demands.

Article 129.

1. The law shall establish the forms of participation in Social Security and in the activities of those public bodies whose operation directly affects the quality of life or the general welfare.

2. The public authorities shall efficiently promote the various forms of participation within companies and shall encourage cooperative societies by means of appropriate legislation. They shall also establish means to facilitate access by the workers to ownership of the means of production.

Article 130.

1. The public authorities shall attend to the modernisation and development of all economic sectors and, in particular, those of agriculture, livestock raising, fishing and handcrafts, in order to bring the standard of living of all Spaniards up to the same level.

2. With the same objective in view, special treatment shall be given to mountainous areas.

Article 131.

1. The State, through the law, shall be able to plan general economic activity in order to meet collective needs, balance and harmonise regional and sectorial development and stimulate the growth of income and wealth and its more equitable distribution.

2. The Government shall draft planning projects in accordance with the forecasts supplied by the Autonomous Communities and the advice and collaboration of trade unions and other professional, business and financial organisations. A council shall be set up for this purpose, whose composition and duties shall be established by law.

Article 132.

1. The legal system governing public domain and community property shall be regulated by law, on the principle that they shall be inalienable and imprescriptible and not subject to attachment or encumbrance.

2. The property of the State public domain shall be that established by law and shall, in any case, include coastal area, beaches, territorial waters and natural resources of the economic zone and the continental shelf.

3. The State and National Heritage, as well as their administration, protection and preservation, shall be regulated by law.

§ 2 The Spanish Constitution

Article 133.

1. The primary power to raise taxes is vested exclusively in the State by law.
2. The Autonomous Communities and local Corporations may establish and levy taxes, in accordance with the Constitution and the law.
3. Any fiscal benefit affecting State taxes must be established by virtue of law.
4. Public Administrations may only contract financial liabilities and incur expenditures in accordance with the law.

Article 134.

1. It is incumbent upon the Government to prepare the State Budget and upon the Cortes Generales to examine, amend and approve it.
2. The State Budget shall be prepared annually and shall include the entire expenditure and income of the State public sector and in it shall be recorded the amount of the fiscal benefits affecting State taxes.
3. The Government must submit the State Budget to the Congress of Deputies at least three months before the expiration of that of the previous year.
4. If the Budget Law is not passed before the first day of the corresponding financial year, the budget of the previous financial year shall be considered automatically extended until the new one has been approved.
5. Once the State Budget has been approved, the Government may submit bills involving increases in public expenditure or decreases in the revenue corresponding to the same financial year.
6. Any non-governmental bill or amendment which involves an increase in credits or a decrease in budget revenue shall require previous approval by the Government before its passage.
7. The Budget Law may not establish new taxes. It may modify them if a substantive tax law makes provision therefore.

Article 135.

1. All Public Administrations shall adapt their actions to the principle of budgetary stability.
2. Neither the State nor the Autonomous Communities shall enter into a structural deficit beyond the limits stipulated, if applicable, by the European Union for its Member States.
An organic law shall set the structural deficit ceiling allowed for the State and for the Autonomous Communities according to their Gross Domestic Product. Local Authorities shall present a balanced budget.
3. The State and the Autonomous Communities shall have to be authorised by law to issue public debt or to enter into borrowing commitments.
Loans to cover the interest and capital of the Administrations' public debt shall always be understood to be included in the expenditure statement of their budgets and repayment of the same shall be awarded utmost priority. These loans may not be amended or modified provided that they comply with the conditions set forth in the issue law.
The volume of public debt for all the Public Administrations as a whole as a ratio of the State's Gross Domestic Product shall not surpass the benchmark figure set forth in the Treaty on the Functioning of the European Union.
4. Ceilings on structural deficit and public debt volume may only be overrun in the event of natural catastrophes, economic recession or situations of extraordinary emergency which are beyond the State's control and considerably harm the State's financial situation or its economic or social sustainability, recognised as such by the absolute majority of the Congress of Deputies.
5. An organic law shall develop the principles referred to in this article, together with the involvement, in the respective procedures, of the bodies for institutional co-ordination between Public Administrations on fiscal and financial policy matters. It shall, in any event, regulate:
 - a) The distribution of the deficit and debt ceilings between the various Public Administrations, the exceptional cases in which said ceilings may be overrun and the way and term in which the possible deviations over one or other ceiling shall be corrected.

§ 2 The Spanish Constitution

- b) The methodology and procedure for calculating structural deficit.
- c) The liability of each Public Administration in the event of a breach of budgetary stability targets.

6. In accordance with their respective Statutes and within the limits referred to in this article, the Autonomous Regions shall adopt the appropriate provisions to ensure effective application of the principle of stability in their budgetary regulations and decisions.

Article 136.

1. The Court of Audit is the supreme body in charge of auditing State accounts and financial management, as well as those of the public sector.

It shall be directly answerable to the Cortes Generales and shall exercise its duties by delegation of the latter when examining and verifying the General Accounts of the State.

2. The State Accounts and those of the State public sector shall be submitted to the Court of Audit and shall be audited by the latter.

The Court of Audit, without prejudice to its own jurisdiction, shall remit an annual report to the Cortes Generales in which it shall, when applicable, inform the latter of any infringements that may, in its opinion, have been committed, or any liabilities that may have been incurred.

3. The members of the Court of Audit shall enjoy the same independence and protection from dismissal and shall be subject to the same incompatibilities as judges.

4. An organic law shall regulate the composition, organisation and duties of the Court of Audit.

PART VIII

Territorial Organisation of the State

CHAPTER ONE

General Principles

Article 137.

The State is organised territorially into municipalities, provinces and Autonomous Communities that may be constituted. All these bodies shall enjoy self-government for the management of their respective interests.

Article 138.

1. The State guarantees the effective implementation of the principle of solidarity vested in Article 2 of the Constitution, safeguarding the establishment of a just and adequate economic balance between the different areas of Spanish territory and taking into special consideration the circumstances pertaining to those which are islands.

2. The differences between the Statutes of the different Autonomous Communities may in no case imply economic or social privileges.

Article 139.

1. All Spaniards have the same rights and obligations in any part of the State territory.

2. No authority may adopt measures which directly or indirectly obstruct freedom of movement and settlement of persons and free movement of goods throughout the Spanish territory.

§ 2 The Spanish Constitution

CHAPTER TWO

Local Government

Article 140.

The Constitution guarantees the autonomy of the municipalities, which shall enjoy full legal personality. Their government and administration shall be incumbent on their respective Town Councils, consisting of Mayors and Councillors. The Councillors shall be elected by the residents of the municipalities by universal, equal, free and secret suffrage, in the manner laid down by the law. The Mayors shall be elected by ten Councillors or by the residents. The law shall regulate the terms under which an open council system shall be applicable.

Article 141.

1. The province is a local entity, with its own legal personality, determined by the grouping of municipalities and by territorial division, in order to carry out the activities of the State. Any alteration of the provincial boundaries must be approved by the Cortes Generales by means of an organic law.

2. The government and autonomous administration of the provinces shall be entrusted to Provincial Councils («Diputaciones») or other Corporations that are representative in character.

3. Groups of municipalities other than those of the provinces may be formed.

4. In the archipelagos, the islands shall also have their own government in the form of «Cabildos» or Councils.

Article 142.

Local treasuries must have sufficient funds available in order to perform the tasks assigned by law to the respective Corporations, and shall mainly be financed by their own taxation as well as by their share of State taxes and those of the Autonomous Communities.

CHAPTER THREE

Autonomous Communities

Article 143.

1. In the exercise of the right to self-government recognised in Article 2 of the Constitution, bordering provinces with common historic, cultural and economic characteristics, island territories and provinces with historic regional status may accede to self-government and form Autonomous Communities in accord with the provisions contained in this Title and in the respective Statutes.

2. The right to initiate the process towards self-government lies with all the Provincial Councils concerned or with the corresponding inter-island body and with two-thirds of the municipalities whose populations represent at least the majority of the electorate of each province or island. These requirements must be met within six months from the initial agreement to this effect reached by any of the local Corporations concerned.

3. If this initiative should not be successful, it may only be repeated after five years have elapsed.

Article 144.

The Cortes Generales may, in the national interest, and by means of an organic law:

a) authorise the setting up of an Autonomous Community provided that its territorial area does not exceed that of a province and that it does not possess the characteristics outlined in clause 1 of Article 143;

b) authorise or grant, as the case may be, a Statute of Autonomy for territories not forming part of the provincial organisation;

c) take over the initiative of the local Corporations referred to in clause 2 of Article 143.

§ 2 The Spanish Constitution

Article 145.

1. Under no circumstances shall the federation of Autonomous Communities be allowed.
2. The Statutes may provide for the circumstances, requirements and terms under which the Autonomous Communities may reach agreements amongst themselves for management and the rendering of services in matters pertaining to them, as well as the nature and effects of the consequent communication to the Cortes Generales. In all other cases, cooperation agreements between the Autonomous Communities shall require the authorisation of the Cortes Generales.

Article 146.

The draft Statute shall be drawn up by an assembly consisting of the members of the Provincial Council or inter-island body of the provinces concerned and by the Deputies and Senators elected in them, and shall be sent to the Cortes Generales for its enactment into law.

Article 147.

1. Within the terms of the Constitution, the Statutes shall constitute the basic institutional rules of each Autonomous Community and the State shall recognise and protect them as an integral part of its legal order.
2. The Statutes of Autonomy must contain:
 - a) the name of the Community which corresponds most closely to its historic identity;
 - b) its territorial boundaries;
 - c) the name, organisation and seat of its own autonomous institutions;
 - d) the powers assumed within the framework established by the Constitution and the basic conditions for the transfer of the services corresponding to them.
3. Amendment of the Statutes shall conform to the procedure established therein and shall in any case require the approval of the Cortes through an organic law.

Article 148.

1. The Autonomous Communities may assume competences over the following matters:
 - i) organisation of their institutions of self-government;
 - ii) changes in the municipal boundaries within their territory and, in general, the functions appertaining to the State Administration regarding local Corporations, whose transfer may be authorised by legislation on local government;
 - iii) town and country planning and housing;
 - iv) public works of benefit to the Autonomous Community, within its own territory;
 - v) railways and roads whose routes lie exclusively within the territory of the Autonomous Community and transport by the above means or by cable which also fulfils the same conditions;
 - vi) ports of haven, recreational ports and airports and, in general, those which are not engaged in commercial activities;
 - vii) agriculture and livestock raising, in accordance with general economic planning;
 - viii) woodlands and forestry;
 - ix) environmental protection management;
 - x) planning, construction and operation of hydraulic projects, canals and irrigation of benefit to the Autonomous Community; mineral and thermal waters;
 - xi) inland water fishing, the shellfish industry and aquaculture, shooting and river fishing;
 - xii) local fairs;
 - xiii) promotion of the economic development of the Autonomous Community within the objectives set by national economic policy;
 - xiv) handicrafts;
 - xv) museums, libraries and music conservatories of interest to the Autonomous Community;
 - xvi) the Autonomous Communities monuments of interest:

§ 2 The Spanish Constitution

xvii) the promotion of culture, of research and, when applicable. the teaching of the language of the Autonomous Community;
 xviii) the promotion and planning of tourism within its territorial area;
 xix) the promotion of sports and the proper use of leisure;
 xx) social assistance:
 xxi) health and hygiene;
 xxii) the supervision and protection of its buildings and facilities; coordination and other powers relating to local police forces under the terms to be laid down by an organic law.

2. After five years have elapsed, the Autonomous Communities may, by amendment of their Statutes, successively expand their powers within the framework established in Article 149.

Article 149.

1. The State holds exclusive competence over the following matters;

- i) regulation of the basic conditions guaranteeing the equality of all Spaniards in the exercise of their rights and in the fulfilment of their constitutional duties;
- ii) nationality, immigration, emigration, status of aliens, and right to asylum;
- iii) international relations;
- iv) defence and the Armed Forces;
- v) administration of Justice;
- vi) commercial, criminal and penitentiary legislation; procedural legislation, without prejudice to the necessary special applications in these fields derived from the peculiar features of the substantive law of the Autonomous Communities;
- vii) labour legislation without prejudice to its execution by the bodies of the Autonomous Communities;
- viii) civil legislation, without prejudice to the preservation, modification and development by the Autonomous Communities of their civil laws, «fueros» or special laws, whenever these exist; in any event the enactments related to the application and effectiveness of legal provisions, legalcivil relations arising from the form of marriage. The keeping of records and drawing up of public instruments, bases of contractual obligations, rules for resolving legal conflicts and determination of the sources of law in conformity, in this last case, with the rules of the «fueros» or with those of special laws.
- ix) legislation on intellectual and industrial property;
- x) customs and tariff regulations; foreign trade;
- xi) monetary system: foreign currency, exchange and convertibility; bases for the regulations concerning credit, banking and insurance;
- xii) legislation on weights and measures, determination of the official time;
- xiii) bases and coordination of general planning of economic activity;
- xiv) general finances and the State Debt;
- xv) promotion and general coordination of scientific and technical research;
- xvi) external health measures; bases and general coordination of health matters; legislation on pharmaceutical products;
- xvii) basic legislation and financial system of the Social Security, without prejudice to the implementation of its services by the Autonomous Communities;
- xviii) the bases of the legal system of Public Administration and the statutes of their public officials which shall, in any case, guarantee that all persons under said administration will receive equal treatment; the common administrative procedure, without prejudice to the special features of the Autonomous Community's own organisations; legislation on compulsory expropriation; basic legislation on contracts and administrative concessions and the system of liability of all Public Administrations;
- xix) sea fishing, without prejudice to the powers which, in the regulations governing this sector, shall be conferred on the Autonomous Communities;
- xx) merchant navy and the registering of ships; lighting of coasts and signals at sea; general purpose ports; general-purpose airports; control of air space, air traffic and transport; meteorological services and registration of aircraft;

§ 2 The Spanish Constitution

xxi) railways and land transport passing through the territory of more than one Autonomous Community; general system of communications; motor vehicle traffic; Post Office services and telecommunications; air and underwater cables and radio communications;

xxii) legislation, regulation and concession of hydraulic resources and development when the waters flow through more than one Autonomous Community, and authorisation for hydro-electrical installations when their development affects another Community or when energy transport goes beyond its territorial area;

xxiii) basic legislation on environmental protection, without prejudice to the powers of the Autonomous Communities to establish additional protective measures; basic legislation on woodlands, forestry, and livestock trails;

xxiv) public works of general benefit or whose execution affects more than one Autonomous Community;

xxv) bases of the organisation of mining and energy;

xxvi) system of production, sale, possession and use of arms and explosives;

xxvii) basic rules relating to the organisation of the press, radio and television and, in general, all the means of social communication, without prejudice to the powers vested in the Autonomous Communities related to their development and implementation;

xxviii) protection of Spain's cultural and artistic heritage and national monuments against exportation and despoliation; museums, libraries and archives belonging to the State, without prejudice to their management by the Autonomous Communities;

xxix) public safety, without prejudice to the possibility of the creation of police forces by the Autonomous Communities, in the manner to be laid down in their respective Statutes and within the framework to be established by an organic law;

xxx) regulation of the conditions relative to the obtaining, issuing and standardisation of academic degrees and professional qualifications and basic rules for the development of Article 27 of the Constitution, in order to guarantee the fulfilment of the obligations of the public authorities in this matter;

xxxi) statistics for State purposes;

xxxii) authorisation for popular consultations through the holding of referendums.

2. Without prejudice to the jurisdiction which may be assumed by the Autonomous Communities, the State shall consider the promotion of culture a duty and an essential function and shall facilitate cultural communication between the Autonomous Communities, in collaboration with them.

3. Matters not expressly assigned to the State by virtue of the present Constitution may fall under the jurisdiction of the Autonomous Communities by virtue of their respective Statutes. Matters for which jurisdiction has not been assumed by the Statutes of Autonomy shall fall within the jurisdiction of the State, whose laws shall prevail, in case of conflict, over those of the Autonomous Communities regarding all matters over which exclusive jurisdiction has not been conferred upon the latter. State law shall, in all cases, be supplementary to that of the Autonomous Communities.

Article 150.

1. The Cortes Generales, in matters of State competence, shall confer upon all or any of the Autonomous Communities the power to enact legislation for themselves within the framework of the principles, bases and guidelines established by State law. Without prejudice to the competence of the Courts, each basic law shall contain the method of control by the Cortes Generales over the Autonomous Communities' legislation.

2. The State may transfer or delegate to the Autonomous Communities, through an organic law, powers appertaining to it which by their very nature lend themselves to transfer or delegation. The law shall, in each case, provide for the appropriate transfer of financial means, as well as specify the forms of control to be retained by the State.

3. The State may enact laws establishing the principles necessary for harmonising the rule-making provisions of the Autonomous Communities, even in the case of matters over which jurisdiction has been conferred upon the latter, when this is necessary in the general interest. It is incumbent upon the Cortes Generales, by an absolute majority of the members of each House, to evaluate this necessity.

§ 2 The Spanish Constitution

Article 151.

1. It shall not be necessary to wait for the five-year period referred to in clause 2 of Article 148 to elapse when the initiative for attaining self-government is agreed upon within the time limit specified in Article 143, clause 2, not only by the corresponding Provincial Councils or inter-island bodies but also by three-quarters of the Municipalities of each province concerned, representing at least the majority of the electorate of each one, and said initiative is ratified in a referendum by the absolute majority of the electors in each province, under the terms to be laid down by an organic law.

2. In the case provided for in the foregoing clause, the procedure for drafting the Statute shall be as follows:

i) The Government shall summon all the Deputies and Senators elected in the electoral districts within the territorial area seeking self-government in order that they may constitute themselves into an Assembly for the sole purpose of drawing up the corresponding draft Statute for Autonomy, to be passed by the absolute majority of its members.

ii) Once the draft Statute has been passed by the Parliamentary Assembly, it shall be remitted to the Constitutional Committee of Congress which shall examine it within a period of two months with the cooperation and assistance of a delegation from the Assembly which has proposed it, in order to decide in common agreement upon its definitive formulation.

iii) If such an agreement is reached, the resulting text shall be submitted in a referendum to the electorate of the provinces within the territorial area to be covered by the proposed Statute.

iv) If the draft Statute is approved in each province by the majority of validly cast votes, it shall be referred to the Cortes Generales. Both Houses, in plenary assembly, shall decide upon the text by means of a vote of ratification. Once the Statute has been passed, the King shall sanction it and shall promulgate it as a law.

v) If the agreement referred to in sub-clause ii) of this clause is not reached, the legislative process for the draft Statute in the Cortes Generales shall be the same as that for a bill. The text passed by the latter shall be submitted in a referendum to the electorate of the provinces within the territorial area to be covered by the draft Statute. In the event that it is passed by the majority of the validly cast votes in each province, it shall be promulgated in the manner outlined in the foregoing sub-clause.

3. In the cases described in subclauses iv) and v) of the foregoing clause, failure to pass the draft Statute by one or several of the provinces shall not prevent the incorporation of the remaining provinces into an Autonomous Community in the manner to be prescribed by the organic law envisaged in clause 1 of this article.

Article 152.

1. In the case of Statutes passed by means of the procedure referred to in the foregoing article, the institutional Autonomous organisation shall be based on a Legislative Assembly elected by universal suffrage in accordance with a system of proportional representation which shall ensure, moreover, the representation of the various areas of the territory; a Governing Council with executive and administrative functions and a President elected by the Assembly from among its members and appointed by the King. The President shall be responsible for directing the Governing Council, which constitutes the supreme representation of the respective Community as well as the State's ordinary representation in the latter. The President and the members of the Governing Council shall be politically accountable to the Assembly.

A High Court of Justice, without prejudice to the jurisdiction exercised by the Supreme Court, shall head the Judiciary within the territorial area of the Autonomous Community. The Statutes of the Autonomous Communities shall establish the circumstances and manner in which they will participate in the organisation of the judicial demarcations of the territory, all of which must be in conformity with the provisions of the organic law on judicial power and compatible with its unity and independence.

Without prejudice to the provisions of Article 123, successive proceedings, if any, shall be held before judicial bodies located in the same territory of the Autonomous Community as that in which the competent Court of the First Instance is located.

§ 2 The Spanish Constitution

2. Once the respective Statutes have been sanctioned and promulgated, they may only be amended by means of the procedures established therein and through a referendum of the electors registered in the corresponding electoral rolls.

3. By grouping the bordering municipalities together, the Statutes may set up their own territorial electoral districts, which will enjoy full legal personality.

Article 153.

Control over the bodies of the Autonomous Communities shall be exercised by:

a) the Constitutional Court, in matters related to the constitutionality of its regulatory provisions having the force of law;

b) the Government, after the handing down by the Council of State of its opinion, regarding the exercise of the delegated functions referred to in clause 2 of Article 150;

c) administrative litigation jurisdictional bodies, with regard to autonomous administration and its regulations;

d) the Court of Audit, with regard to financial and budgetary matters.

Article 154.

A delegate appointed by the Government shall direct State administration in the territorial area of each Autonomous Community and shall coordinate it, when necessary, with the Community's own administration.

Article 155.

1. If an Autonomous Community does not fulfil the obligations imposed upon it by the Constitution or other laws, or acts in a way seriously prejudicing the general interests of Spain, the Government, after lodging a complaint with the President of the Autonomous Community and failing to receive satisfaction therefore, may, following approval granted by an absolute majority of the Senate, take the measures necessary in order to compel the latter forcibly to meet said obligations, or in order to protect the above-mentioned general interests.

2. With a view to implementing the measures provided in the foregoing clause, the Government may issue instructions to all the authorities of the Autonomous Communities.

Article 156.

1. The Autonomous Communities shall enjoy financial autonomy for the development and exercising of their powers, in conformity with the principles of coordination with the State Treasury and solidarity amongst all Spaniards.

2. The Autonomous Communities may act as delegates or collaborators of the State for the collection, management and settlement of the latter's tax resources, in conformity with the law and the Statutes.

Article 157.

1. The resources of the Autonomous Communities shall consist of:

a) taxes wholly or partially assigned to them by the State; surcharges on State taxes and other shares in State revenue;

b) their own taxes, rates and special levies;

c) transfers from an inter-territorial clearing fund and other allocations to be charged to the State Budget;

d) revenues accruing from their property and private law income;

e) the yield from credit operations.

2. The Autonomous Communities may under no circumstances introduce measures to raise taxes on property located outside their territory or likely to hinder the free movement of goods or services.

3. The exercise of the financial powers enumerated in clause 1. above, the rules for settling conflicts which may arise, and the possible forms of financial collaboration between the Autonomous Communities and the State, may be regulated by an organic law.

§ 2 The Spanish Constitution

Article 158.

1. In the State Budget, an allocation may be made to the Autonomous Communities in proportion to the volume of State services and activities for which they have assumed responsibility and to their guarantee to provide a minimum level of basic public services throughout Spanish territory.

2. With the object of correcting inter-territorial economic imbalances and implementing the principle of solidarity, a clearing fund shall be set up for investment expenditure, the resources of which shall be distributed by the Cortes Generales amongst the Autonomous Communities and the provinces, as the case may be.

PART IX

Constitutional Court

Article 159.

1. The Constitutional Court shall consist of twelve members appointed by the King. Of these, four shall be nominated by Congress by a majority of three-fifths of its members, four shall be nominated by the Senate with the same majority, two shall be nominated by the Government, and two by the General Council of the Judiciary.

2. The members of the Constitutional Court shall be appointed from amongst Magistrates and Prosecutors, University professors, public officials and lawyers, all of whom must be jurists of recognised standing with at least fifteen years' experience in the professional exercise.

3. The members of the Constitutional Court shall be appointed for a period of nine years and shall be renewed by thirds every three years.

4. Membership of the Constitutional Court is incompatible with: any representative function, any political or administrative office, a management role in a political party or trade union or any employment in their service, a career as a Judge or Prosecutor, and any professional or commercial activity whatsoever.

Furthermore, the disabilities related to the members of the Judiciary shall also be applicable to the members of the Constitutional Court.

5. The members of the Constitutional Court shall be independent and irremovable during their term of office.

Article 160.

The President of the Constitutional Court shall be appointed by the King from amongst its members, on the recommendation of the Plenum of the Court itself, for a term of three years.

Article 161.

1. The Constitutional Court has jurisdiction over the whole of Spanish territory and is competent to hear:

a) appeals against the alleged unconstitutionality of laws and regulations having the force of law. A declaration of unconstitutionality of a legal provision with the force of law, interpreted by jurisprudence, shall also affect the latter, although the overturned sentence or sentences shall not lose their status of *res judicata*.

b) individual appeals for protection («*recursos de amparo*») against violation of the rights and liberties contained in Article 53.2 of the Constitution, in the circumstances and manner to be laid down by law;

c) conflicts of jurisdiction between the State and the Autonomous Communities or amongst the Autonomous Communities themselves;

d) other matters assigned to it by the Constitution or by organic laws.

2. The Government may contest before the Constitutional Court the provisions and resolutions adopted by the agencies of the Autonomous Communities, which shall bring

§ 2 The Spanish Constitution

about the suspension of the contested provisions or resolutions, but the Court must either ratify or lift the suspension, as the case may be, within a period of not more than five months.

Article 162.

1. The following are eligible to:

a) lodge an appeal against unconstitutionality: the President of the Government, the Ombudsman, fifty Deputies, fifty Senators, the executive corporate bodies of the Autonomous Communities and, when applicable, their Assemblies;

b) lodge an individual appeal for protection («recurso de amparo»): any individual or corporate body with a legitimate interest, as well as the Ombudsman and the Office of the Public Prosecutor.

2. In all other cases, the organic law shall determine which persons and bodies are eligible.

Article 163.

If a judicial body considers, in some action, that a regulation with the status of law which is applicable thereto, and upon the validity of which the judgment depends, may be contrary to the Constitution, it may bring the matter before the Constitutional Court in the circumstances, manner and subject to the consequences to be laid down by law, which shall in no case be suspensive.

Article 164.

1. The judgments of the Constitutional Court shall be published in the «Official State Gazette» (Boletín Oficial del Estado), with the dissenting votes, if any. They have the validity of res judicata from the day following their publication, and no appeal may be brought against them. Those which declare the unconstitutionality of a law or of a rule with the force of law, and all those which are not limited to the subjective acknowledgment of a right, shall be fully binding on all persons.

2. Unless the judgement rules otherwise, that part of the law not affected by unconstitutionality shall remain in force.

Article 165.

An organic law shall regulate the functioning of the Constitutional Court, the statutes of its members, the procedure to be followed before it, and the conditions governing actions brought before it.

PART X

Constitutional amendment

Article 166.

The right to propose a Constitutional amendment shall be exercised under the terms contained in clauses 1 and 2 of Article 87.

Article 167.

1. Bills on Constitutional amendment must be approved by a majority of three-fifths of the members of each House. If there is no agreement between the Houses, an effort to reach it shall be made by setting up a Joint Commission of Deputies and Senators which shall submit a text to be voted on by the Congress and the Senate.

2. If approval is not obtained by means of the procedure outlined in the foregoing clause, and provided that the text has been passed by an absolute majority of the members of the Senate, Congress may pass the amendment by a two-thirds vote in favour.

§ 2 The Spanish Constitution

3. Once the amendment has been passed by the Cortes Generales, it shall be submitted to ratification by referendum, if so requested by one tenth of the members of either House within fifteen days after its passage.

Article 168.

1. If a total revision of the Constitution is proposed, or a partial revision thereof, affecting the Preliminary Title, Chapter Two, Section 1 of Title I, or Title II, the principle shall be approved by a two-thirds majority of the members of each House, and the Cortes shall immediately be dissolved.

2. The Houses elected must ratify the decision and proceed to examine the new Constitutional text, which must be approved by a two-thirds majority of the members of both Houses.

3. Once the amendment has been passed by the Cortes Generales, it shall be submitted to ratification by referendum.

Article 169.

The process of Constitutional amendment may not be initiated in time of war or when any of the states outlined in Article 116 are in operation.

ADDITIONAL PROVISIONS

One.

The Constitution protects and respects the historic rights of the territories with «fueros» (local laws).

The general updating of the «fuero» system shall be carried out, when appropriate, within the framework of the Constitution and of the Statutes of Autonomy.

Two.

The declaration regarding coming of age contained in Article 12 of this Constitution shall not be prejudicial to the cases to which the «fueros» are applicable within the sphere of Private Law.

Three.

Any modification of the financial and tax system of the Canary Islands Archipelago shall require a previous report from the Autonomous Community or, as the case may be, from the provisional autonomous body.

Four.

In the Autonomous Communities where more than one Territorial Court holds jurisdiction, the Statutes of Autonomy may maintain the existing Courts, distributing jurisdiction among them, provided this is done in accordance with the provisions of the Organic Law on Judicial Power and in conformity with the unity and independence of the latter.

INTERIM PROVISIONS

One.

In the territories with a provisional Autonomous regime, their higher corporate bodies may, by means of a resolution passed by an absolute majority of their members, assume for themselves the initiative towards autonomy which, in clause 2 of Article 143 is conferred upon the Provincial Councils or corresponding inter-island bodies.

§ 2 The Spanish Constitution

Two.

The territories which in the past have, by plebiscite, approved draft Statutes of Autonomy and which at the time of the promulgation of this Constitution, have provisional autonomous regimes, may proceed immediately in the manner provided in clause 2 of Article 148, when agreement to do so is reached by an absolute majority of their pre-autonomous higher corporate bodies, and the Government is duly informed. The draft Statutes shall be drawn up in accordance with the provisions of Article 151, clause 2, when so requested by the pre-autonomous corporate body.

Three.

The right to initiate the process towards autonomy conferred on the local corporations or their members, which is contained in clause 2 of Article 143, shall be postponed for all purposes until the first local elections have taken place, once the Constitution has come into force.

Four.

1. In the case of Navarra, and for the purposes of its incorporation into the General Basque Council or the Basque autonomous regime replacing it, instead of the procedure established by the provisions of Article 143 of the Constitution, the initiative shall lie with the competent «Foral» body, which shall take its decision by a majority of the member comprising it. In order for this initiative to be valid, the decision of the competent «Foral» body must also be ratified by a referendum expressly held for this purpose and passed by a majority of the valid votes cast.

2. If the initiative does not succeed, it may only be repeated during a different term of office of the competent «Foral» body and, in any case, only when the minimum period laid down in Article 143 has elapsed.

Five.

The cities of Ceuta and Melilla may set themselves up as Autonomous Communities if their respective Municipal Councils should so decide by means of a resolution adopted by an absolute majority of their members and if the Cortes Generales so authorise, in an organic law, under the terms provided in Article 144.

Six.

When several draft Statutes are referred to the Constitutional Committee of Congress, they shall be considered in the order according to which they are received. The two month period referred to in Article 151 shall be counted from the moment that the Committee completes its study of the draft or drafts that it has successively examined.

Seven.

The provisional autonomous bodies shall be considered to be dissolved in the following cases:

- a) once the bodies established by the Statutes of Autonomy passed in conformity with the Constitution have been set up;
- b) in the event that the initiative directed towards obtaining autonomy should not be successful on account of non-compliance with the requirements provided in Article 143;
- c) if the body has not exercised the right recognised in the first interim provision within a period of three years.

Eight.

1. Once the present Constitution has become effective, the Houses which adopted it shall assume the functions and powers indicated therein for the Congress and Senate respectively, while under no circumstances shall their term of office continue beyond June 15, 1981.

§ 2 The Spanish Constitution

2. With regard to the provisions of Article 99, the promulgation of the Constitution shall be considered as creating the Constitutional basis for the subsequent application of these provisions. To this end, there shall be a thirty-day period, as from the date of the promulgation, for implementing the provisions contained in said article.

During this period, the current President of the Government who shall assume the functions and powers laid down by the Constitution for this office, may decide to use the authority conferred on him by Article 115 or, through resignation, leave the way open for application of the provisions established in Article 99. In the latter case, the situation related to the President shall be that provided in clause 2 of Article 101.

3. In the event of dissolution, in accordance with the provisions of Article 115, and if the provisions contained in Article 68 and 69 have not been enacted into law, the rules previously in force shall be applicable in the elections, except with regard to ineligibilities and incompatibilities, to which the provisions of the second subclause b) of clause 1 of Article 70 of the Constitution shall be directly applicable, as well as its provisions concerning the voting age and those contained in Article 69, clause 3.

Nine.

Three years after the election of the members of the Constitutional Court for the first time, lots shall be drawn to choose a group of four members of the same electoral origin who are to resign and be replaced. The two members appointed following proposal by the Government and the two appointed following proposal by the General Council of Judicial Power shall be considered as members of the same electoral origin exclusively for this purpose. After three years have elapsed, the same procedure shall be carried out with regard to the two groups not affected by the aforementioned drawing of lots. Thereafter, the provisions contained in clause 3 of Article 159 shall be applied.

REPEALS

1. Law/1977, of January 4, for political reform, is hereby repealed, as well as the following laws, in so far as they were not already repealed by the abovementioned law: the Law of the Fundamental Principles of the Movement of May 17, 1958, the «Fuero» of the Spanish People of July 17, 1945, the Labour «Fuero» of March 9, 1938, the Law of Constitution of the Cortes of July 17, 1942, the Law of Succession of Chief of State of July 26, 1947, all of which as amended by the Organic Law of State of January 10, 1967. Likewise repealed are the last mentioned law and that of the National Referendum of October 22, 1948.

2. To the extent that it may still retain some validity, the Law of October 25, 1839 shall be definitively repealed in so far as it affects the provinces of Alava, Guipuzcoa and Vizcaya.

Subject to the same terms, the Law of July 21, 1876 shall be considered to be definitively repealed.

3. Likewise, any provisions contrary to those contained in the Constitution shall be repealed.

FINAL PROVISION

This Constitution shall become effective on the day of the publication of the official text in the «Official State Gazette» (Boletín Oficial del Estado). It shall also be published in the other languages of Spain.